

Perú (Nivel 2)

Aunque el Gobierno del Perú aún no cumple con los estándares mínimos para eliminar la trata, está desplegando esfuerzos considerables para lograrlo. El Gobierno demostró esfuerzos cada vez mayores respecto al periodo del informe anterior, considerando el impacto que ha tenido la pandemia de COVID-19 en su capacidad de lucha contra la trata de personas. Por todo esto, el Perú se mantuvo en el Nivel 2. Estos esfuerzos incluyeron la apertura de cuatro fiscalías especializadas en delitos de trata de personas, la contratación de más personal policial especializado, y la derivación de 96 niñas a refugios estatales para víctimas de trata. El Gobierno aprobó una ley que fortalece las disposiciones relativas a la indemnización de las víctimas de trata, y que a la vez refuerza la capacitación de los fiscales y jueces. Sin embargo, el Gobierno no cumplió con los estándares mínimos en un número importante de áreas clave. Las autoridades procesaron y condenaron menos tratantes que en el periodo del informe anterior, y los servicios ofrecidos a las víctimas adultas, niños, personas LGBTQI+ y víctimas de trata de personas con fines de explotación laboral siguieron siendo insuficientes. Aunque las autoridades abrieron una serie de investigaciones a funcionarios públicos por presunta complicidad en delitos de trata de personas, el Gobierno no procesó ni condenó a ninguno. Asimismo, el Gobierno redujo el presupuesto asignado a las actividades contra la trata de personas por tercer año consecutivo; y el financiamiento público destinado a luchar contra la trata resultó extremadamente insuficiente.

RECOMENDACIONES EN ORDEN DE PRIORIDAD:

Incrementar los recursos generales para combatir todas las formas de trata de personas y asignar a las entidades que integran la comisión multisectorial presupuestos específicos para la lucha contra la trata, como lo plantea la ley. Finalizar e implementar el Plan Nacional Contra la Trata de Personas, con el fin de apoyar y fortalecer los esfuerzos del Gobierno en su conjunto por combatir la trata de personas más allá del vencimiento del Plan Nacional de Acción vigente. Redoblar esfuerzos para procesar tanto los delitos de trata con fines de explotación laboral, como los de explotación sexual; condenar y castigar a los tratantes, incluidos los funcionarios cómplices; y pronunciar sentencias adecuadas a los tratantes condenados. Incrementar el financiamiento de servicios integrales a las víctimas, de modo que se incluyan asistencia legal, médica, psicosocial, en

refugios, en gestión de casos, educativa o profesional. Además, brindar servicios a más víctimas peruanas y extranjeras. Reforzar la disponibilidad de los servicios para que respondan a las necesidades de las víctimas adultas, niños, personas LGBTQI+, y víctimas de trata de personas con fines de explotación laboral. Reformar la ley contra la trata de personas, para que prescriba penas por trata sexual que guarden relación con las penas prescritas para otros delitos graves, como la violación. Analizar de forma activa a miembros de grupos vulnerables, incluidos los trabajadores del comercio sexual y a los venezolanos desplazados, con el fin de reconocer indicadores de trata y poder derivar a las presuntas víctimas a servicios de protección. Fortalecer e institucionalizar los servicios de reintegración para las víctimas infantiles que están dejando las instituciones de refugio y para otras víctimas que rechazan o que no tienen acceso a estas instituciones. Dedicar mayores recursos a la planificación multisectorial, a operativos policiales de inteligencia que incluyan acuerdos para la retirada rápida de las víctimas a ubicaciones seguras separadas de los tratantes, a entrevistas que se centren en las víctimas, a una transición rápida hacia servicios de atención y de refugio para las víctimas identificadas, y a una planificación de contingencia para evitar que las víctimas permanezcan en las comisarías. Fortalecer e institucionalizar la capacitación para la policía, fiscales y jueces relativa a la aplicación de las leyes contra la trata de personas y a la implementación de procedimientos centrados en las víctimas y que tomen en cuenta el tratamiento de los traumas. Garantizar que todos los oficiales aplican una misma definición de trata consistente con el derecho internacional, de modo que todas las víctimas de explotación sexual o laboral gocen de un acceso adecuado a la justicia y a la protección. Mejorar los sistemas de recopilación de datos, con el fin de recopilar y notificar datos completos, armonizados y desagregados sobre los esfuerzos relativos a la aplicación de la legislación contra la trata de personas y a la protección de las víctimas. Llevar a cabo programas de extensión de servicios a la comunidad y de prevención dirigidos a las poblaciones de riesgo, incluidas las comunidades indígenas rurales. Para ello, se deberán usar métodos culturalmente apropiados y lenguas locales. Aplicar leyes contra delitos que facilitan la trata, tales como la contratación laboral fraudulenta, las comisiones por contratación, actividades ilegales de minería y tala, y operaciones de falsificación.

PROCESAMIENTO JUDICIAL

El Gobierno continuó realizando esfuerzos en el campo del procesamiento judicial. En marzo de 2021, el Gobierno reformó el Código Penal, reubicando y dando una nueva numeración a múltiples disposiciones. El artículo 129 (antes, artículo 153) del Código Penal tipificaba como delito la explotación sexual y la trata con fines de explotación laboral y prescribía penas de ocho a 15 años de prisión para delitos que involucraran a víctimas adultas, de 12 a 20 años de prisión para delitos que involucraran víctimas entre 14 y 18 años, y un mínimo de 25 años de prisión para delitos que involucraran a víctimas menores de 14 años. Si bien estas sanciones eran lo suficientemente severas, en lo que respecta a la explotación sexual, estas penas no eran proporcionales a aquellas prescritas para otros delitos graves, como la violación. La ley definía la trata de personas en términos más generales para incluir todas las formas de explotación laboral y la adopción ilegal o la venta de niños sin fines de explotación. El Código Penal también incluyó 15 delitos separados relativos a diferentes tipos de explotación, incluidos “trabajo forzoso”, “esclavitud y otras formas de explotación”, y 10 delitos que incluyen la explotación sexual. Los oficiales a menudo clasificaban a las víctimas de trata y procesaban los casos bajo leyes contra la explotación, muchas de las cuales se superponían significativamente unas con otras y con el artículo 129 (antes, artículo 153). Muchos oficiales solo aplicaban leyes relativas a la trata en el caso de delitos que ocurrían antes de la explotación. El Gobierno continuó introduciendo el nuevo Código Procesal Penal en 32 de los 34 distritos judiciales, lo que permitió que las autoridades iniciaran persecuciones por trata de personas sin necesidad de las víctimas presentaran una denuncia.

La policía especializada en la trata de personas llevó a cabo 65 operativos en 2020, que resultaron en 214 detenciones en los primeros tres trimestres del año, frente a los 186 operativos y 364 detenciones en 2019, y a los 158 operativos y 423 detenciones en 2018. Casi la mitad de estos operativos fueron realizados en enero y febrero de 2020. A inicios de la pandemia, el Gobierno dirigió el trabajo de la policía, incluidas las unidades contra la trata de personas, para que aplicaran medidas paliativas y de salud pública. El Gobierno no suministró equipos de protección personal adecuados a la policía, y se registraron altos índices de enfermedad y muerte entre el personal policial, lo que en el año 2020 conllevó una capacidad de investigación socavada respecto de los delitos de trata. Las fiscalías especializadas participaron en 214 operativos contra la trata y detuvieron a 179 sospechosos, frente a los 252 operativos y 209 sospechosos detenidos en 2019, y a los 201 operativos y 151 sospechosos detenidos en 2018. En 2020, las autoridades

procesaron a por lo menos 44 sospechosos y condenaron a 29 tratantes, frente a los 67 sospechosos procesados y 55 tratantes condenados en 2019, y a los 142 sospechosos procesados y 74 tratantes condenados en 2018. Los jueces pronunciaron 15 absoluciones. El Gobierno no publicó información relativa a las penas de los tratantes condenados. Los tribunales y las fiscalías interrumpieron sus operaciones durante dos meses entre marzo y mayo de 2020, tras lo cual funcionaron con capacidad reducida durante el resto del periodo del informe. Las medidas sanitarias tales como las restricciones de movimiento limitaron el acceso de las fiscalías a los casos y a los documentos conexos, que solo se encontraban accesibles en copias impresas. Del mismo modo, el alto índice de infecciones entre los funcionarios públicos - incluidos los fiscales especializados - menguó aún más la capacidad del Gobierno para procesar a los tratantes. El Poder Judicial desarrolló un sistema para atender casos en línea, pero la implementación de esta nueva plataforma desaceleró la rapidez de los procesos.

El Gobierno mantuvo unidades policiales especializadas en la trata de personas en las 25 regiones del Perú, así como en el área de Lima Metropolitana, e incrementó el personal de 394 a 448 oficiales. El tamaño, la capacidad y el presupuesto de estas unidades variaban ampliamente entre las regiones, y algunas donde se registraba una alta prevalencia de trata contaban con pocos oficiales especializados. El Gobierno asignó 15.5 millones de soles (414 480 \$) a estas unidades, lo que resultó insuficiente para las necesidades en términos de capacitación, operativos, equipamiento de oficina y tecnología. El Gobierno no aplicó una resolución ministerial que requería que la policía especializada en la trata de personas permaneciera en sus respectivas unidades por un mínimo de dos años; y la rotación frecuente entre el personal policial socavó la eficacia de las unidades especializadas al momento de investigar los delitos de trata de personas. En 2020, el Gobierno contrató a cuatro fiscales para que abrieran fiscalías especializadas en cuatro regiones más, lo que significó un total de 39 fiscalías especializadas en la trata a lo largo de 12 regiones. ONG y funcionarios del Gobierno informaron que los jueces a menudo consideraban la captación como un elemento esencial del delito de trata; requerían pruebas del uso de la fuerza, del fraude o de la coerción en el caso de delitos de trata sexual de menores; o reducía los cargos por trata a delitos menores. En las reformas del Código Penal del mes de marzo de 2021, el Gobierno creó un nuevo título llamado “Delitos Contra la Dignidad Humana” que incluye todas las formas de trata y 15 tipos de explotación. Expertos locales informaron que este cambio podría influenciar a los oficiales para

que apliquen con mayor eficacia estas leyes en los casos que involucran coerción psicológica más que fuerza física. El Gobierno organizó dos cursos virtuales de una semana de duración sobre la persecución de casos de trata dirigidos a más de 700 participantes. Además, el Gobierno se alió con una organización internacional para impartir capacitaciones exhaustivas a través de programas de certificación para jueces y fiscales, con el fin de mejorar su capacidad para aplicar leyes contra la trata. Así, en 2020, 49 fiscales y 111 jueces completaron programas de capacitación de seis y ocho semanas respectivamente. Si bien numerosos fueron los ministros que recopilaban datos para realizar el seguimiento de sus esfuerzos relativos a la aplicación de la legislación contra la trata de personas y de protección a las víctimas, el Gobierno carecía de un sistema coordinado de recopilación de datos, lo que dificultó el trabajo de las autoridades respecto de la verificación de estadísticas, evaluación de esfuerzos y respuesta a las tendencias. La superposición del marco jurídico peruano complicó aún más los esfuerzos de recopilación de datos, ya que las autoridades a menudo procesaban casos de trata bajo la figura de otro tipo de delitos.

El Gobierno reconoció la complicidad de funcionarios en delitos de trata. La corrupción en todos los niveles de los sistemas peruanos de justicia penal y de aplicación de la ley entorpecieron los esfuerzos por lograr que los tratantes rindan cuentas. Los oficiales de policía, incluidos algunos miembros de las unidades especializadas en la lucha contra la trata, presuntamente aceptaron sobornos provenientes de los tratantes para evitar que se llevaran a cabo investigaciones. Esta presunta complicidad de algunos miembros de la policía, junto con una comunicación deficiente, alimentaron la desconfianza entre la policía y los fiscales, tanto a nivel nacional como regional, y socavaron la eficacia de los esfuerzos por aplicar las leyes contra la trata. Aunque en el año 2020 el Gobierno no procesó ni condenó a ningún oficial por complicidad relacionada con la trata, las autoridades abrieron numerosas investigaciones a empleados del Gobierno por presunta complicidad en delitos de trata de personas. En diciembre de 2020, los fiscales encabezaron un operativo que resultó en la detención de dos policías especializados en la lucha contra la trata y de otros dos oficiales públicos, por brindar protección a un grupo de presuntos tratantes y por permitirles operar con total impunidad. En un caso muy sonado en octubre de 2020, el Gobierno detuvo a siete oficiales de policía por estar implicados en un operativo de trata sexual de menores encabezado por un cantante muy popular. El caso de un exjefe de la

policía y de un suboficial, detenidos en 2019 por trata de personas y corrupción, continuó bajo investigación.

PROTECCIÓN

El Gobierno siguió realizando esfuerzos por identificar y proteger a las víctimas de trata, a pesar de que los servicios ofrecidos a algunos grupos eran limitados. En 2020, las unidades policiales especializadas en la trata de personas identificaron a 640 presuntas víctimas, frente a 1054 en 2019, y a 1600 en 2018. Entre las víctimas se registraron 385 adultos (todas mujeres) y 255 niños (118 niñas y 137 niños); 561 eran de nacionalidad peruana, y 79 provenían de otros países. Las fiscalías especializadas informaron haber identificado a 470 víctimas en 2020. Asimismo, el Gobierno compartió información actualizada sobre víctimas que los fiscales identificaron en 2019 (1266) y en 2018 (1189). De estas víctimas, 411 eran mujeres y 59, hombres; 244 eran niños y 226, adultos; 402 eran de nacionalidad peruana y 68, de otras nacionalidades (45 de Venezuela, siete de Ecuador, una de Colombia, una de Bolivia, y 14 de otros países no especificados). El Gobierno no informó hasta qué punto las estadísticas de la policía y de los fiscales relativas a la identificación de las víctimas se superpusieron, y tampoco recopiló datos sobre las víctimas identificadas a través de otras fuentes. Con la ayuda de una ONG, el Gobierno publicó nuevas directrices en materias de identificación para los inspectores municipales, personal de salud y oficiales de policía de primera línea.

Las autoridades derivaron a todas las víctimas al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), quien coordinó el refugio o atención familiar y brindó a las víctimas asistencia legal, social, psicológica y de reintegración. El MIMP operó unidades especializadas para prestar asistencia a los niños que necesitaban protección especial, incluidos todos los niños víctimas de trata. Así, en el año 2020, el MIMP creó seis unidades especializadas adicionales, alcanzando un total de 25 unidades a lo largo de todas las regiones del Perú. Estas unidades brindaron asistencia a 223 niños (204 peruanos, 15 venezolanos, dos ecuatorianos y dos colombianos), y, en 2020, las autoridades derivaron a 96 niñas a refugios especializados en la atención a víctimas de trata, frente a las 130 víctimas infantiles que recibieron ayuda, y a las 114 niñas derivadas a refugios especializados en el año 2019. El MIMP operó siete refugios especializados exclusivos para niñas víctimas de trata con fines sexuales (incluidas algunas que las autoridades clasificaron como víctimas de explotación sexual) en cuatro regiones (Cusco, Lima, Loreto y Puno). Estas instalaciones podían recibir un total de 130 niños.

Generalmente, los servicios y el personal en estos refugios fueron sólidos, e incluso se contaba con un abogado a tiempo completo, personal médico y psicólogo. A inicios de la pandemia, los refugios permanecieron cerrados para los no residentes, limitando así los servicios disponibles para las víctimas. Con el apoyo de una organización internacional, el Gobierno realizó mejoras tecnológicas en los refugios y empezó a ofrecer a las víctimas sesiones de consejería virtual, servicios jurídicos y comunicación con sus familias durante una parte del año.

La ley contra la trata de personas estipulaba que el Gobierno debía proteger a las víctimas mediante alojamiento temporal, transporte, atención médica y psicológica, asistencia legal y asistencia para la reintegración. Si bien muchos ministerios brindaron estos servicios a las víctimas, el Gobierno no cumplió del todo este mandato. El Gobierno contó con un protocolo intersectorial para brindar protección a las víctimas de trata, y muchos ministerios tuvieron protocolos internos para la atención de las víctimas, aunque las autoridades los implementaron de manera heterogénea debido a la falta de recursos financieros y humanos, así como a los desafíos en términos de coordinación. El Gobierno ofreció servicios especializados a las víctimas de trata en el caso de las niñas envueltas en tráfico sexual, mientras que otras pudieron acceder a servicios para víctimas de violencia de género o a otras formas de apoyo por parte del Estado y de ONG. El MIMP operó 52 centros de atención residencial para niños, que podían albergar a víctimas de trata, incluidos niños. Sin embargo, estos centros no eran exclusivos para las víctimas de trata de personas, y carecían de servicios. Las mujeres podían acceder a servicios jurídicos, psicológicos y sociales - pero no a alojamiento nocturno - a través de la red nacional de Centro de Emergencia Mujer, pero el Gobierno no recolectó datos relativos al número de víctimas de trata que se atendió en los centros. El Gobierno abrió 51 nuevos centros de emergencia en 2020, alcanzando así un total de 446, aunque fueron cerrados temporalmente entre marzo y mayo de 2020 debido a la pandemia. Numerosas organizaciones de la sociedad civil brindaron asistencia a las víctimas de trata, incluidas dos ONG que eran miembros de la comisión intersectorial del Gobierno contra la trata de personas; y aproximadamente 70 refugios privados acogieron a víctimas de trata. Las víctimas adultas, las víctimas de trata con fines de explotación laboral, y las víctimas hombres tuvieron menos opciones de refugio. Asimismo, los informes indicaron que a menudo las autoridades negaban servicios a otros hombres: ningún refugio aceptaba hombres. El Gobierno brindó a las personas LGBTQI+ un acceso limitado a servicios: a menudo las autoridades discriminaban a estos grupos y de manera general no

admitían víctimas transgénero en los refugios estatales. El Gobierno reconoció que existía una desigualdad en términos de servicios a las víctimas LGBTQI+, particularmente respecto de los niños, y buscó la colaboración de una organización internacional para desarrollar políticas e impartir capacitaciones dirigidas a los proveedores de servicios, de modo que pudieran ofrecer servicios especializados e integrales a los niños LGBTQI+ víctimas de trata. Las víctimas de nacionalidad extranjera generalmente eran elegibles para los mismos servicios que las peruanas, pero el Gobierno no especificó si derivó víctimas extranjeras a refugios estatales. Las víctimas extranjeras eran elegibles para residencia temporal y permanente según la Ley del Refugiado del Perú, pero el Gobierno no informó si ese año otorgó la residencia a víctimas de trata.

Los funcionarios de justicia penal a menudo no emplearon métodos centrados en la víctima, y en ocasiones llevaron a cabo operativos contra la trata de personas sin contar con los recursos necesarios, tales como vehículos para trasladar a las víctimas o lugares seguros para analizar a las víctimas potenciales, aislarlas de los sospechosos, y brindarles atención inmediata. La Unidad de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos (UDAVIT) del Ministerio Público brindó atención de corto plazo a 529 víctimas, y coordinó las derivaciones hacia otros proveedores de servicios inmediatamente después de algunos operativos policiales. En comparación con estas estadísticas, la UDAVIT asistió a 920 víctimas durante el periodo del informe anterior. ONG informaron que el financiamiento insuficiente y la falta de capacitación sobre métodos centrados en la víctima limitaron la capacidad de la UDAVIT para brindar una atención consistente y de calidad a las víctimas. Los expertos locales informaron que en ocasiones la UDAVIT brindó servicios a las víctimas solo si estas declaraban ante los investigadores. La policía y los fiscales no identificaron adecuadamente los indicadores de trata entre las mujeres que trabajaban en el comercio sexual, y los oficiales no distinguieron adecuadamente entre las víctimas de trata y delitos similares, dejando así a las víctimas sin identificar y sin acceso a servicios integrales para las víctimas de trata. Los servicios para las víctimas no estuvieron disponibles inmediatamente después de los operativos policiales durante las noches ni los fines de semana.

La UDAVIT operó 23 espacios de emergencia que podían brindar alojamiento a corto plazo a mujeres y niños que estaban participando en investigaciones y procesos. El Gobierno asignó a las víctimas un defensor legal del Ministerio de

Justicia y Derechos Humanos para salvaguardar sus derechos jurídicos y guiarlas en el sistema jurídico. Tras ello, las autoridades iniciaban el procesamiento judicial. El Gobierno contó con 336 defensores legales, incluidos nueve especializados en la trata. Las personas LGBTQI+ sufrieron discriminación por parte de las fuerzas policiales y a menudo fueron revictimizadas durante los procesos penales. Algunas víctimas prestaron declaraciones a través de entrevistas en cámaras Gesell seguras, y las autoridades desarrollaron un sistema para adaptar las medidas de protección ofrecidas por las cámaras Gesell a las plataformas en línea durante los procesos virtuales. La falta de incentivos para participar en las investigaciones y el acceso limitado a servicios prácticos, tales como medios de vida alternativos, llevaron a muchas víctimas adultas a rechazar servicios del Gobierno. Los oficiales mencionaron la falta de servicios de protección adecuados como uno de los principales impedimentos para combatir eficazmente la trata en el Perú. Además, los servicios insuficientes llevaron a numerosos grupos a una situación de alto riesgo o de reingreso en la trata.

Las reformas del Código Penal en marzo de 2021 establecieron una serie de criterios mínimos que el juez debería considerar en la indemnización de las víctimas de trata, y otorgó autoridad al Gobierno para que este pueda confiscar la propiedad de un tratante con el objetivo de que se cumpla con todas sus obligaciones de pago. Sin embargo, el Gobierno no informó si en 2020 los tribunales ordenaron el pago de indemnizaciones o si las víctimas recibieron indemnizaciones. El Gobierno informó que brindó asistencia a víctimas extranjeras de trata para eliminar multas u otras sanciones en las que pudieran haber incurrido por haber ingresado al país sin documentación. Sin embargo, debido a la falta de procedimientos adecuados de identificación de las víctimas, las autoridades pueden haber multado o sancionado a algunas víctimas de trata no identificadas por actos ilícitos que los tratantes las forzaron a cometer. En ocasiones, las autoridades colocaron a víctimas infantiles en comisarías, en medio de niños detenidos por delitos. En estos casos, las víctimas enfrentaban condiciones similares a la detención mientras esperaban que se les derivara a un refugio.

PREVENCIÓN

El Gobierno continuó realizando esfuerzos en el campo de la prevención. La comisión multisectorial contra la trata, dirigida por el Ministerio del Interior (MDI) y conformada por 13 agencias gubernamentales y dos ONG, continuó coordinando la implementación del plan nacional de acción contra la trata de personas, vigente

hasta 2021. La comisión redactó una Política Nacional frente a la Trata de Personas, pero no entregó el proyecto final para su aprobación en el Congreso durante el periodo del informe. Las medidas de mitigación de la pandemia y la inestabilidad política limitaron la capacidad de la comisión multisectorial para coordinar de forma eficaz las actividades durante el periodo del informe. El Gobierno no presentó al Congreso el informe anual requerido sobre los avances en la implementación del plan nacional de acción, que debe entregarse cada mes de septiembre. En 2020, el Gobierno asignó una partida presupuestaria específica de 2.35 millones de soles (649 350 \$) al MDI para la lucha contra la trata de personas, lo que representó una reducción considerable de los aproximadamente 4 millones de soles (1.11 \$ millones) asignados en 2019. Otros ministerios financiaron actividades contra la trata a través de sus presupuestos generales. Una ley de 2019 estipulaba que la comisión debía preparar, y que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) debía priorizar, un presupuesto multisectorial que incluyera presupuestos dedicados a la lucha contra la trata para las entidades que integran la comisión multisectorial. El MDI presentó su solicitud al MEF en enero de 2020, pero el MEF no la aprobó durante el periodo del informe. Los oficiales informaron que un financiamiento insuficiente obstaculizó su capacidad para combatir eficazmente la trata de personas, especialmente en lo que respecta a la protección de las víctimas.

El Gobierno contó con una comisión separada, un protocolo interministerial, y un plan nacional para combatir el trabajo forzoso y el trabajo infantil. Los inspectores de trabajo tenían el mandato de supervisar las agencias de empleo para verificar el cumplimiento de la normativa contra el cobro de comisiones por contratación o contra la retención de los documentos de identidad o de cualquier otro artículo personal de los trabajadores. Asimismo, el Gobierno informó que los inspectores de trabajo derivaron casos de contratación fraudulenta a fiscales especializados en la lucha contra la trata de personas. Sin embargo, el Gobierno no informó si aplicó sanciones a las agencias de empleo por alguna de estas prácticas durante el periodo del informe. El Gobierno mantuvo las unidades de inspección laboral especializadas en trabajo forzoso y trabajo infantil. En 2020, estas unidades participaron en por lo menos un operativo conjunto con la policía especializada en la trata que llevó a la identificación de víctimas de trata. En octubre de 2020, el Congreso peruano aprobó una legislación que otorgaba derechos laborales y protección jurídica a las trabajadoras domésticas - por ejemplo, sueldo mínimo y número máximo de horas de trabajo a la semana - que son equivalentes a los

derechos de los que gozan otros trabajadores, disminuyendo así la vulnerabilidad de este grupo ante la explotación. En el marco de un acuerdo con el Gobierno de Cuba, el Ministerio de Salud del Perú se comprometió a pagar un estipendio mensual de 2000 \$ a cada miembro de una comisión médica cubana que trabajó en Perú entre junio y diciembre. Estos pagos directos al personal pueden haber reducido su vulnerabilidad ante la posibilidad de ser explotados en una situación de trabajo forzoso por parte del Gobierno cubano.

El Gobierno operó dos líneas telefónicas disponibles las 24 horas para la denuncia pública de presuntos casos de trata, aunque el servicio estaba disponible únicamente en español. En respuesta al número cada vez mayor de llamadas por parte del público durante la pandemia, el MDI incrementó el financiamiento para una de las líneas telefónicas y capacitó al 85 % de sus operadores durante el periodo del informe. Con el apoyo de una ONG, el MIMP produjo y publicó en línea una guía para que los niños reconozcan los riesgos ante la trata de personas durante la pandemia. En junio de 2020, el Gobierno se alió con organizaciones de la sociedad civil para impartir una capacitación virtual de tres días a 44 periodistas de todo el país con el fin de reforzar sus conocimientos y fortalecer los métodos utilizados para cubrir los casos de trata. El MDI llevó a cabo dos campañas digitales de concientización para brindar información sobre la trata, alcanzando así a 400 líderes comunitarios, padres, estudiantes de Lima y de una ciudad cercana, y organizó una campaña digital para sensibilizar a los niños respecto de los riesgos de explotación a través de plataformas en línea. Autoridades nacionales y regionales participaron en una campaña mediática en múltiples plataformas encabezada por una organización internacional, cuyo objetivo era influir en la opinión pública para reducir la tolerancia social respecto de la trata.

El Gobierno redobló esfuerzos por emitir documentos nacionales de identidad para todos los ciudadanos peruanos a través, entre otros, de programas diseñados para llegar a las comunidades indígenas remotas donde el riesgo de trata era elevado. La pandemia ralentizó estos esfuerzos durante el periodo del informe. El Gobierno no permitió que las personas transgénero cambiaran la información relativa a su género en sus documentos de identidad. Esta falta de acceso a documentación exacta incrementó su vulnerabilidad ante la explotación. El Gobierno no informó sobre ningún esfuerzo por prevenir el turismo sexual infantil, aunque el cierre de las fronteras y las restricciones para viajar debido a la pandemia frenaron el turismo durante gran parte del año. El Gobierno llevó a cabo operativos policiales

y detenciones por actividades de minería y tala ilegales, delitos que alimentan la demanda de la trata sexual y de la trata con fines de explotación laboral.

EL PERFIL DE LA TRATA DE PERSONAS

Tal como se ha informado en los últimos cinco años, los tratantes de personas explotan a víctimas nacionales y extranjeras en el Perú, y también explotan a víctimas peruanas en el extranjero. Los tratantes explotan a mujeres y niñas peruanas y extranjeras, y, en menor medida, a niños, en actos de trata sexual dentro del país. Los tratantes captan a sus víctimas cada vez más en las redes sociales, a menudo a través de propuestas de trabajo fraudulentas o de relaciones románticas engañosas. Los tratantes captan con engaños a mujeres y niñas peruanas, venezolanas y bolivianas, y las llevan a comunidades remotas cerca de operaciones de minería y tala a través de falsas promesas de oportunidades laborales lucrativas, y las explotan en redes de tráfico sexual tras su llegada. Turistas provenientes de Estados Unidos y Europa pagan por sexo con víctimas de trata en áreas como Cusco, Lima y la Amazonía peruana. En la región de Loreto, grupos criminales facilitan el traslado de turistas extranjeros por bote a lugares remotos donde los tratantes explotan sexualmente a mujeres y niños en locales a lo largo del río Amazonas. Los tratantes explotan a adultos y niños peruanos y extranjeros en trabajo forzoso en el país, principalmente en actividades de minería de oro legales e ilegales y otras actividades conexas, tala, agricultura, fabricación de ladrillos, fábricas clandestinas, operaciones de falsificación, mendicidad callejera organizada, y servicio doméstico. Los tratantes someten a los peruanos al trabajo forzoso en minas de oro y empleos de servicio en campamentos improvisados cercanos. Los tratantes fuerzan a las víctimas a través de la captación fraudulenta, coerción por deudas, aislamiento y restricción a la libertad de circulación, reteniendo o no pagando sus sueldos, y a través de amenazas y del uso de violencia física. Los tratantes someten a los niños a trabajo forzoso en la mendicidad, comercio ambulante, servicio doméstico, producción y transporte de cocaína, y en otras actividades delictivas. Los miembros restantes de la organización terrorista Sendero Luminoso usan la fuerza y la coerción para someter a los niños y adultos al trabajo forzoso en la agricultura, cultivando o transportando estupefacientes ilícitos, en la servidumbre doméstica, y en ocasiones captan niños mediante el uso de la fuerza y de la coerción para que sirvan como combatientes o guardias.

Los peruanos indígenas, muchos de los cuales viven en áreas remotas con acceso limitado a los servicios gubernamentales, son particularmente vulnerables ante la

trata. Los peruanos LGBTQI+ son vulnerables ante la trata, incluida la reexplotación; las mujeres y niñas transgénero también carecen de un acceso a documentación exacta y se encuentran en una situación de riesgo particularmente elevado. Desde 2016, más de 1 000 000 de venezolanos que han huido de la crisis humanitaria en su país han ingresado al Perú. Adultos y niños venezolanos son vulnerables ante el tráfico sexual y laboral - a menudo atraídos con promesas laborales fraudulentas - durante su trayecto para llegar al Perú o después de su llegada. Es posible que el Gobierno cubano haya obligado a trabajar a algunos de los 85 profesionales médicos que el Gobierno peruano contrató para ayudar durante la pandemia. El impacto negativo de la pandemia en las oportunidades económicas exacerbó los riesgos existentes en las comunidades vulnerables y conllevó un aumento en el número de personas vulnerables a la trata. Las medidas de mitigación de la pandemia incrementaron los riesgos entre los niños que no pudieron dejar sus hogares o asistir a la escuela durante gran parte del año, especialmente los niños LGBTQI+ u otros que terminaron huyendo de situaciones difíciles o de abuso en sus hogares. Los expertos locales informan sobre un incremento de la explotación sexual infantil en línea, en la que los tratantes explotan sexualmente a los niños en transmisiones en vivo por Internet a cambio de una compensación. La actividad ilegal, incluido el tráfico sexual y laboral, es común en regiones del país con limitada presencia del Gobierno, incluidas las áreas de minería y tala y el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). La minería y la tala ilegales alimentan la demanda por el tráfico sexual y laboral en el Perú.

Los tratantes explotan a las mujeres y a los niños peruanos en el tráfico sexual en otros países, especialmente dentro de Sudamérica. Asimismo, explotan, dentro del Perú, a mujeres y niñas provenientes de países vecinos. ONG y autoridades extranjeras han informado que los tratantes explotan a peruanos transgénero en el tráfico sexual en Argentina, Italia y Suecia. Los tratantes someten a adultos y niños peruanos a trabajo forzoso en otros países de Sudamérica, en los Estados Unidos, y en otros países. ONG y oficiales del Gobierno han informado que la complicidad de funcionarios en delitos de trata y la corrupción generalizada en los sistemas de aplicación de la ley y de justicia penal siguen obstaculizando los esfuerzos contra la trata de personas.